

bandera socialista



Año L
Nº 145
Octubre 2024
pstperú Lit-ci
<http://pst.pe>
bs.pstperuano@gmail.com

200 soles

Periódico del Partido Socialista de los Trabajadores



MAFIAS POLÍTICAS,
EXTORSIÓN Y EMPRESARIOS
RAPIÑAN AL PAÍS

pág. 2

SECUESTRADOS
POR LA
CRIMINALIDAD

pág. 3

¿ECHAR ABAJO UNA PARTE
O TODO EL "LEGADO" DE
FUJIMORI?

pág. 4

LOS DESPIDOS MASIVOS
Y CÓMO HACERLES
FRENTE

pág. 6

PARAR (TODOS) CONTRA
LA INSEGURIDAD
Y EL GOBIERNO

pág. 8

LOS INTERESES
ECONÓMICOS DETRÁS
DE LOS INCENDIOS
FORESTALES

pág. 10

Por el fin de los ataques israelíes
contra el Líbano y el pueblo palestino!

pág. 12

Mafias políticas, extorsionadores y empresarios rapiñan al país

Incendios que consumen la amazonía causando muerte y destrucción ante la pasividad del gobierno; bandas criminales que extienden sin freno sus territorios de influencia en la mismísima Capital; numerosas familias que ven pisoteado su derecho a la justicia ante el emblemático caso del genocida, violador de derechos humanos y corrupto de alta factura que fue Alberto Fujimori, quien primero fue ilegalmente indultado y al morir recibió honores del Estado con tres días de duelo nacional. Y numerosas atrocidades más a lo que se suma una nueva oleada de despidos y ceses colectivos por parte de una patronal.

Los peores vaticinios acerca de los costos de la permanencia de Dina Boluarte en el gobierno, fueron largamente superados en los hechos.

Este gobierno que se formó con los despojos del gobierno Castillo, archivando la propuesta electoral que obtuvo mayoría en 2021, aceptando la regencia del fujimorismo y la ultraderecha, y burlando la exigencia nacional de adelanto de elecciones generales, recibió el apoyo del Congreso con la misión de quedarse a cualquier costo.

Al imponerse por medio de una de las más sangrientas represiones a una rebelión popular en la historia reciente del país, con 60 muertos y miles de heridos, lo que se estaba gestando a vista de todos era un gobierno de componenda, o complicidad, entre el Ejecutivo y el Congreso, bautizado después como el “gobierno de los corruptos”, donde ambos sectores se prestan entre sí una precaria legalidad y el mayor peso lo detentan las fuerzas del Congreso.

Así, una inescrupulosa Dina Boluarte pudo continuar a pesar de su responsabilidad directa en los asesinatos de manifestantes, y a pesar de haber dado rienda suelta a sus mezquinas ambiciones: llenarse de relojes y joyas obtenidas por el uso



Foto: Diario del César web

El crimen organizado ha desnudado la incapacidad de las FF.PP. y el gobierno para combatir este flagelo. El Estado de Emergencia declarado no resolverá este problema. Solo la organización y autodefensa de los trabajadores y pobladores le podrá hacer frente.

corrupto de su poder, sin importarle cuánto tiempo le quede para exhibirlas antes de convertirse en la primera presidenta en prisión.

El “gobierno de los corruptos” manejado por la derecha y el empresariado

Y, con una presidenta así, dispuesta a todo con tal de durar hasta el 2026, las fuerzas del Congreso consiguieron el instrumento perfecto para ejercer un poder excepcional como legislativo y dar rienda suelta a ambiciones más siniestras todavía: copar el sistema judicial y buscar lo mismo en el sistema electoral, flexibilizar las leyes contra el crimen, favorecer sus negocios particulares como la

educación privada y la minería ilegal.

Todo ello junto con ponerse al servicio de las grandes corporaciones y transnacionales bajando las regulaciones, ampliando la entrega de bosques, mares y áreas protegidas a la voracidad capitalista amenazando el hábitat de poblaciones nativas y la pesca de los pescadores artesanales.

Es en ese contexto que la patronal se siente empoderada para imponer despidos y ceses colectivos de trabajadores en un número creciente de empresas.

El proyecto político de la derecha y la patronal

Los mismos partidos que controlan el gobierno, investigados como organizacio-

nes criminales enquistadas en el poder, y que han convertido al país en un territorio rapiñado, hoy se presentan como los abanderados en el país del movimiento “libertario” que impulsan los partidos ultraderechistas en diversos lugares del mundo, al estilo Milei o Trump, que se alimentan del fracaso de gobiernos burgueses reformistas, populistas e “izquierdistas”.

Esa política de saqueo del país ya la aplicó el fujimorismo en el Perú en los años noventas, el plan neoliberal, y es la causa principal de la actual situación de abismal desigualdad social donde hay nuevos dueños del país frente a una gran masa de trabajadores que viven al borde de la pobreza, cuando no están ya en ella por el desempleo o el subempleo. Sin embargo, ahora la derecha viene por más.

El proyecto político que se está impulsando para el 2026, hoy ya está en el poder y es con esa política que hemos llegado a la situación actual de rapiña

generalizada. La muestra más reciente de esa ambición imparable es la ley impulsada por el fujimorismo, y promulgada por el gobierno, de reforma del sistema de pensiones, una ley hecha centralmente para defender y beneficiar los intereses de las corporaciones financieras y AFP que manejan los fondos de pensiones, cuyos abusos despiertan un repudio generalizado.

Situación insoportable y solución impostergable

La situación ha llegado a extremos que amenazan mortalmente a los sectores populares tal como se ha visto en los incendios forestales y el impacto de las extorsiones con atentados que vienen cobrando vidas.

Por eso el reciente paro de transportistas ha sido centralmente una lucha contra el gobierno, para exigir no solo solución al problema de las extorsiones sino también la defensa del derecho al trabajo en el servicio de colectivos y el cese de la brutal persecución del gobierno a través de la ATU.

En el paro de transportistas el gobierno ha conseguido una tregua, y como falsa muestra de voluntad ha optado por el efectismo fácil, comprobadamente inútil y hasta contraproducente que es la declaración de estado de emergencia en casi todo Lima, pero evidentemente eso no resolverá el problema, y hasta puede empeorarlo, son contar el hecho que ese estado de emergencia será utilizado por el gobierno contra las justas luchas.

Otros sectores obreros y populares también sienten necesidad de expresar su bronca y exigir soluciones

Secuestrados por la criminalidad

El Perú, literalmente, se encuentra secuestrado por la criminalidad. De la grande y pequeña, de la que controla el dúo Gobierno-Congreso y la que controla las calles.

Más allá de las responsabilidades inmediatas y la ineffectividad o no de las medidas que se dictan y ofrecen para cada caso, todo tiene que ver con el sistema de economía neoliberal que nadie, y sobre todo los de arriba, quieren poner en cuestión. Lo cierto es que detrás de la crisis actual está el fracaso de este modelo, que se impulsa en nombre de llevarnos al primer mundo, cuando en realidad nos lleva a la barbarie. Por supuesto, si los trabajadores no hacemos algo para evitarlo y salvarnos, porque no hay otra salida.

Los transportistas salieron a hacerle frente al crimen organizado masificado en su sector como en otras áreas de la economía popular, con un paro que paralizó la capital el jueves 26. En respuesta, el gobierno declaró en emergencia los distritos más pobres de la capital disponiendo su patrulla por el Ejército, exponiendo a la población civil a sus abusos, y anuncia otras medidas que, sin duda alguna, serán nuevos fracasos ante una criminalidad que se desboca y amenaza seguir creciendo.

Al mismo tiempo que arde la capital por los ataques del crimen organizado, gran parte del país, sobre todo la Amazonía, era y es devorada por gigantescos incendios forestales ante el que el Gobierno poco o nada hace, y que son alentados por mafias vinculadas al agronegocio. Sólo hace meses el mafioso Congreso hizo aprobar por insistencia una

nueva Ley Forestal que incentiva la destrucción de la Amazonía. En este caso no solo estamos ante un crimen contra el medio ambiente, sino contra la propia población pobre y de comunidades indígenas que sufren muertes y destrucción de los hábitats donde viven.

Estos hechos, que ponen de relieve el peso que alcanza el crimen organizado en el país, en realidad apenas son la punta del iceberg de un mal mucho mayor. El crimen opera en la minería informal e ilegal. En el tráfico de drogas. En el sicariato y en el de las extorsiones. Esto es: comprende una significativa parte de la economía nacional que controla la burguesía, y afecta, sobre todo, a la población trabajadora y pobre.

Así, es normal que sus tentáculos alcancen al Estado –el Congreso, el Gobierno y otras instituciones, con múltiples investigaciones de organización criminal–, desde donde operan buscando protección e impunidad. Cuando se trata de estos criminales no estamos ante una delincuencia común, sino ante representaciones con proyectos políticos. El Fujimorismo tiene acusaciones de “organización criminal”, pero es una organización política que embandera y defiende el modelo neoliberal y autoritario que implantó su mentor recién fallecido. Lo mismo sucede con las otras variantes políticas, incluida sectores que se llaman de “izquierda”.

¿Y de qué trata el modelo que estos defienden sino de la liberalidad del capital en un país atrasado y sin soberanía, que nos ha convertido en un territorio primario exportador dominado

por multinacionales y que ahora pretende más minería y más deforestación para el agronegocio?

¿De qué trata el modelo sino de un país convertido en “atractivo” para las inversiones por la mano de obra precarizada y barata que ofrece, y sobre todo con 80 % de informalidad donde prende con facilidad el negocio del crimen organizado?

¿Y de qué trata un modelo que desnacionaliza y termina por acabar con la poca industria existente, y que en la conflictividad EEUU-China nos posiciona en uno de los bandos opresores que desplaza al otro en el control de la infraestructura nacional (empresas eléctricas, ¿mega puerto de Chancay)?

Todo este sistema es la verdadera génesis y promotora de la criminalidad. Por ello se ha hecho funcional con el Estado y tiene influencia a través de diversos partidos.

También se ha hecho funcional para los aparatos sindicales, como la CGTP, que firma pronunciamientos conjuntos con la Sociedad Nacional de Industrias, dizque, para “combatir la criminalidad” –nada menos que con los que causan despidos y trabajo precario, que es otra forma de crimen–, mientras por otro lado deja que las luchas obreras se desgasten y sean derrotadas.

Ante la deriva del país, una vez llenado sus bolsillos, los capitalistas podrán huir si así lo necesitan. Los únicos que sufrimos hoy y sufriremos mañana somos los trabajadores y pobres. Salvar al Perú está en nuestras manos y depende de nosotros.

Así como los transportistas, en su mayoría trabajadores informales o cuentapropistas, salieron



a luchar por soluciones efectivas y se enfrentan al crimen organizado y al Gobierno, debemos hacerlo todos. En el campo, las organizaciones indígenas están llamando a la lucha en defensa de sus territorios. En las zonas invadidas por la gran minería, las poblaciones resisten. En las fábricas los obreros se defienden de los despidos masivos. Necesitamos la lucha unida de todos para enfrentar los múltiples ataques. La unidad de la misma clase obrera para enfrentar la ola que está barriendo con sus derechos y organizaciones.

Esta es salida y no esperar las elecciones del 2026, que colocará en Palacio y el Congreso a otros bandidos. La salida es luchar hasta la derrota del gobierno de Boluarte y su Congreso y arrancar las soluciones inmediatas que se reclaman. Y por esta vía, construir una solución de fondo, con un Gobierno de las organizaciones obreras y populares.

a sus problemas, pero dependen de la convocatoria de los gremios y centrales sindicales, que hasta ahora vienen priorizando el diálogo y la conciliación con el gobierno. Esta política fue aplicada en la coyuntura de la rebelión popular al comienzo del actual gobierno, y está claro que es en parte la causa de la permanencia de este gobierno y sus consecuencias.

Perspectiva obrera y popular

Si el paro de los transportistas hizo temblar al gobierno no es difícil prever lo que sería una lucha unitaria de los trabajadores y el pueblo, y las oportunidades que esto traería para la derrota del gobierno de los corruptos y abrir el camino a la solución de las demandas.

Y no solo eso, la expe-

riencia de una lucha unitaria triunfante que asuma de manera consecuente las banderas de la defensa del medioambiente, la lucha contra el crimen organizado, la defensa de los derechos democráticos, la defensa del empleo y los derechos laborales contra la ofensiva patronal, será la mejor barrera contra las pretensiones ultra liberales de la derecha fujimorista, y no las “alternativas” que brotarán nuevamente en la etapa electoral.

Nos referimos a las diversas versiones del reformismo de izquierda, que están muy enfrascadas en su “pragmatismo” político haciendo el juego al gobierno de los corruptos, cuando no son parte misma de ese gobierno a cambio de prebendas particulares como

es el caso de Perú Libre y la protección palaciega a su principal dirigente.

La solución no es un gobierno más dentro del actual orden de cosas neoliberal, heredado de la dictadura fujimorista, sino derribar ese orden por un plan obrero y popular, un régimen de la más auténtica democracia de la base y un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

¿Echar abajo una parte o todo el “legado” de Fujimori?

 Por Víctor Montes

La muerte del dictador Fujimori –libre e impune– trajo consigo un coro de elogios y agradecimientos, de parte de la patronal, sus partidos y representantes, con el gobierno asesino de Boluarte a la cabeza, por los servicios prestados a sus intereses.

Nada de esto sorprende. Sin embargo, que la izquierda se haya dedicado a denunciar los crímenes de la dictadura, dejando prácticamente intacto el modelo económico neoliberal impuesto bajo sus botas, y consagrado en la Constitución, sí es para llamar la atención.

La denuncia democrática quedó en palabras

Correctamente, la “izquierda” y los sectores llamados “democráticos”, incluidas diversas ONG’s, han denunciado la impunidad con la que murió el dictador Fujimori, a diferencia de la muerte del también genocida y dictador Rafael Videla, muerto en la cárcel de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, en 2013.

Liberado por el Tribunal Constitucional al amparo del gobierno asesino de Boluarte, sin pagar un Sol de la reparación civil impuesta por la justicia burguesa, sin rendir cuentas por tantos otros crímenes cometidos durante la dictadura... su muerte en libertad es una ofensa para las familias afectadas por los asesinatos perpetrados bajo sus órdenes por el Destacamento Colina. También para las mujeres esterilizadas sin su consentimiento, entre otras muchas víctimas de la dictadura.

En todo esto, así como en la denuncia de la concentración del poder en manos de Fujimori y las Fuerzas Armadas, que permitió la persecución de sus opositores políticos, así como de las organizaciones sindicales, con campañas dirigidas desde las oficinas



Foto: Sputnik - Marco Teruggi

con la dictadura, bajo la égida de su Constitución.

Echar abajo todo el “legado” del dictador Fujimori

Para nosotros, en cambio, hablar del legado de Fujimori es justamente hablar de la miseria, la entrega de la economía del país, de nuestros recursos, y el sometimiento de la clase obrera al despotismo de la patronal, sobre la base de un inmenso desempleo escondido bajo la máscara del emprendedurismo, con una tasa de informalidad laboral que bordea al 80% de la clase trabajadora, objetivamente imposibilitada de imponer ninguna condición de negociación a la patronal.

Echar abajo ese tinglado construido por el modelo económico neoliberal de la dictadura, mantenido por todos los gobiernos “democráticos” que le siguieron, de 2001 hasta la actualidad, implica llevar adelante una implacable lucha revolucionaria, tomando las calles, paralizando la producción y enfrentando la represión con nuestra autodefensa, para detener los despidos, recuperar nuestros recursos nacionalizando las minas, el gas y los pozos petroleros, y garantizando, tanto en el campo como en la ciudad, educación y salud gratuitas y de calidad, trabajo estable para todos y salarios que permitan vivir con tranquilidad.

En realidad, lo que la izquierda reformista no dice –y no puede decir– tiene una explicación de fondo: que fue ella misma la que pactó con los partidos patronales el “retorno a la democracia” sin derribar la Constitución de 1993, capitulando ante el modelo económico neoliberal, que apenas han querido maquillar, con políticas públicas que lo hagan “más democrático” y “humano”.

Son esas mismas organizaciones y personajes “de izquierda” los que nos trajeron hasta el momento actual, abandonando una y otra vez, incluso sus limitadas promesas de campaña, para terminar arrodillados ante la democracia pactada

del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) de Montesinos, la denuncia es correcta. Por eso, la vanguardia conciente de la clase obrera sabe que esas banderas son también sus banderas, y que están inscritas en su propia lucha por justicia, incluso ahora que el dictador Fujimori está muerto.

El problema es que la izquierda, y las organizaciones “democráticas”, se limitaron a declarar en medios y por redes sociales, solo para renunciar a encabezar movilización que, sea para festejar o para protestar por su impunidad, tomara las calles, tal como sucedió en Chile tras la muerte del dictador y genocida Pinochet, mientras el gobierno, de manera escandalosa, declaraba “duelo nacional”.

Al modelo, con el pétalo de una rosa

Pero llama mucho más la atención aquello sobre lo que calla –o de lo que habla bajito– la “izquierda”: el modelo neoliberal.

Desde el “fujishock” en adelante, la dictadura impuso una feroz contrarrevolución económica, que inició con la violenta devaluación de la moneda, empujando a millones a la pobreza. Luego vinieron las privatizaciones y la “liberalización del mercado”, que provocó la quiebra de la industria nacional, y por tanto, la desnacionalización de la economía, que además de profundizar su carácter

primario exportador, se hizo completamente adicta al capital extranjero.

Por su parte, el campesinado y las naciones originarias presenciaron la entrega de los recursos naturales que se encontraban en sus territorios ancestrales a la voracidad de las transnacionales mineras y petroleras, mientras el narcotráfico, que en los hechos era la única fuente sostenida de dólares para el mercado nacional durante los primeros años de la dictadura, se usaba como excusa para profundizar la represión.

Pero nada de esto está en el centro de las declaraciones de esa “izquierda”. Consultados por el legado del modelo económico impuesto por la dictadura, Pedro Francke, ex ministro de economía, y José de Echave, ex viceministro de gestión ambiental en el MINAM del gobierno de Pedro Castillo, declararon al diario La República (13.9.24) que el problema de dicho modelo es que “...*las empresas transnacionales no pagan impuestos justos y obtienen sobreganancias...*”. O que los beneficios tributarios creados por los “contratos de estabilidad jurídica” estipulados en la Constitución de la dictadura, “*a comienzos de los 90 podrían tener fundamento*”, pero no es correcto que se sigan utilizando más allá de esos primeros años.

Resulta aceptable, entonces, para estos supuestos izquierdistas, que esa inversión extranjera, principalmente española, inglesa y estadounidense, tomara control de las viejas empresas estatales, primero, y luego se hiciera con el gran negocio de los minerales y los recursos petroleros.

No debe extrañar, pues, que esos mismos representantes de la “izquierda” tiraran por la ventana –junto a su presidente– la consigna de “nacionalización de las mineras” que levantaba Castillo durante su campaña.

La responsabilidad de esa izquierda reformista

En realidad, lo que la izquierda reformista no dice –y no puede decir– tiene una explicación de fondo: que fue ella misma la que pactó con los partidos patronales el “retorno a la democracia” sin derribar la Constitución de 1993, capitulando ante el modelo económico neoliberal, que apenas han querido maquillar, con políticas públicas que lo hagan “más democrático” y “humano”.

Son esas mismas organizaciones y personajes “de izquierda” los que nos trajeron hasta el momento actual, abandonando una y otra vez, incluso sus limitadas promesas de campaña, para terminar arrodillados ante la democracia pactada

Ante los ceses colectivos, la movilización y la lucha unida

Una nueva oleada de ceses colectivos se cierne sobre la clase obrera, como producto del plan patronal para salir de su crisis y recuperar sus ganancias. A la larga lista de fábricas y centros laborales que en los últimos años aplicaron despidos masivos, ahora se suma CELIMA, que el 5 de agosto impuso un procedimiento de cese colectivo contra 216 trabajadores argumentando "motivos estructurales".

La lucha legal

Muchas luchas contra los despidos masivos han dejado marcado ejemplos de heroísmo y combatividad. Pero la mayoría de ellas –por no decir todas– fueron encasilladas a un enfoque legalista; esto es, a lo que dice la ley y disponen las autoridades. Esto desnaturaliza el sentido de la lucha de la clase obrera.

Las leyes están hechas para **regular** y **limitar** los derechos de los trabajadores, y las instituciones (MT y el PJ) están para aplicarlas. Lo hacen pretendiendo ser "justos" pero, en esencia, defienden los intereses empresariales.

En casos de crisis económica, restructuración y cierres de fábrica, las normas no garantizan el derecho al trabajo, y sí permiten a las patronales imponer despidos masivos: Papeleira Atlas, Papelera Nacional, Cogorno, Panasonic, BSH, Faber Castel, Telefónica, Kola Real, San Lorenzo y ahora CELIMA.

Del mismo modo, en nombre de las normas, las empresas recortan nuestro derecho de huelga, retacean los aumentos salariales y cometan distintos abusos.

En el caso del proceso que seguimos contra el cese colectivo en CELIMA, la autoridad no se pronunció contra el cese colectivo sino contra el procedimiento que ha seguido la empresa en su solicitud; es



Escribe Manuel Fernández
Dirigente obrero del PST

TRABAJADORES EN LUCHA
¡ABAJO LOS CESES COLECTIVOS!
LA CRISIS ES RESPONSABILIDAD DE
LAS PATRONALES Y EL GOBIERNO

dicir, objeta la forma y no el contenido. Despues, cuando "regularice" su solicitud, le pedirá que demuestre las causas "objetivas" que alude la empresa. Si lo hace, la autoridad puede aprobar el cese colectivo. Por lo menos, a eso apunta la defensa legal de la empresa.

Por este motivo el "legalismo" de las direcciones es un error. Lleva a depositar confianza en las normas y en las instituciones, cuando muchas veces sus fallos son negativos.

Este "legalismo", además, tiene otra limitación: lleva a no luchar por nuevas conquistas. Por ejemplo, cuando no existía la jornada de 8 horas luchar por ella era **ilegal**, y podías ser condenado hasta a morir en la ahorca como sucedió con los héroes de Chicago. Pero fue una lucha legítima.

Otro ejemplo, ¿qué hacemos cuando cierra una fábrica? La ley lo permite, es decir permite que los trabajadores queden en la calle. Pero los trabajadores argentinos dieron un ejemplo cuando, ante el cierre masivo de fábricas, recuperaron bajo su administración 400 de ellas, logrando así preservar sus trabajos. Se enfrentaron a las normas establecidas y conquistaron nuevos derechos que después se hicieron ley.

Desde este enfoque, decimos: sin dejar de mantener una efectiva lucha

dentro de la legalidad, lo fundamental es denunciar y luchar contra la misma norma de ceses colectivos y de suspensión perfecta, que es el verdadero problema que nos afecta y afecta a toda la clase trabajadora. Así apuntaremos al verdadero problema, y pondremos nuestra pelea al servicio de concientizar y movilizar a todos los trabajadores para ponerles fin. Es la única forma de preservar de verdad nuestro derecho al trabajo.

La falsa confianza en las instituciones del Estado y sus normas

Este derrotero de inyectar confianza en el Estado y sus instituciones es política de los partidos reformistas y de la dirección de la CGTP.

Basta ver el reciente comunicado que firman la Sociedad Nacional de Industrias (gremio empresarial del que CELIMA es socio) y la CGTP denominado "**Los peruanos tenemos derecho a la seguridad y al empleo digno**", publicado el 05.09.24. Ahí se dice:

"Se requiere reactivar la inversión pública y privada, otorgando confianza y estabilidad a los inversores, con normas claras y predictibles que alienten la generación de empleo digno en nuestro país, disminuyendo la enorme informalidad existente..."

Es decir, borrando las

diferencias de clase que nos separa y que nos opone a los empresarios, la central se junta a ellos para exigir "normas claras y empleo digno", cuando utilizando las normas vigentes ellos echan a miles de trabajadores a la calle. Y cuando, detrás de su llamado "empleo digno", lo que en realidad imponen es trabajo más precario y explotado. Peor aún, invocan al gobierno de Boluarte, que nos atienda "con imparcialidad y justicia" (?).

De aquí que, la dirigencia de la central trate la problemática laboral no como un problema con la patronal y con el Estado y sus normas, sino como un tema solo de "algunos" empresarios inescrupulosos, o incluso de algunos funcionarios o instituciones, que no cumplirán la ley. De aquí que toda su "política" se reduzca a conciliar con los empresarios y a depositar confianza en las instituciones y en las normas vigentes. De aquí también que toda su aspiración sea buscar más representantes en el Congreso y en los ministerios, diciendo que así "nos irá mejor".

Todo esto es mentira. Independientemente de quien se encuentre al frente del Estado y sus instituciones, estos, en última instancia, responden a las normas establecidas y estos favorecen a los empresarios, a su modelo

económico neoliberal, la protección de la propiedad empresarial y la "libertad" que estos tienen de hacer negocios explotando a los trabajadores.

La lucha y movilización

Para los trabajadores se trata de colocar el problema en su verdadero lugar: como un problema no solo contra la patronal sino contra sus normas y las instituciones que los protegen: el MT, el PJ, el Gobierno y el Congreso. Por eso lo enfrentamos en el terreno de la lucha, y llamamos a la unidad de los trabajadores para la derogatoria de los ceses colectivos y de la suspensión perfecta.

Ante la crisis capitalista que ellos paguen la crisis, y no los trabajadores. Por ejemplo, con la reducción de horas de trabajo sin reducción de salarios, con licencias pagadas ante las paralizaciones de la producción, hasta la administración y control obrero de las fábricas que despiden trabajadores o se declaran en quiebra.

Esta lucha no es fácil, pero tampoco imposible. Significa que debemos recuperar la confianza en nuestras propias fuerzas y en nuestra lucha, y no en las instituciones y sus normas. Significa que debemos luchar y movilizarnos, y no cifrar expectativas que las soluciones vendrán solo por gestiones legales y conciliando con la patronal, como hacen las direcciones.

Y significa, sobre todo, lograr la verdadera unidad de la clase obrera para desencadenar una verdadera lucha, con un gran paro combativo obrero y popular, que imponga las soluciones de fondo que demandamos.



Foto: Archivo Bandera Socialista

LOS DESPIDOS MASIVOS Y CÓMO HACERLES FRENTE

Los casos de Celima y San Lorenzo –en cese colectivo y suspensión perfecta– confirman que los despidos masivos son el problema más grave que afectan a la clase trabajadora. Ante ellos, las centrales solo se ciñen a la rutina de los trámites legales y a emitir pronunciamientos estériles, cuando se necesita responder con la lucha unida para frenar los despidos y los múltiples ataques patronales que están recortando derechos y disminuyendo la organización obrera.

El 5 de agosto la empresa Celima S.A. convocó a reunirse a 216 trabajadores en sus distintas plantas, para comunicarles que iniciaba contra ellos un proceso de cese colectivo o despido. Arguyó motivos de “reestructuración” debido a la competencia. Desde entonces, el sindicato ha iniciado una larga y dura lucha en defensa de la estabilidad, proceso que se saben cuándo empieza, pero nunca cuándo termina.

El hecho no sorprendió a los activistas más conscientes del sindicato que ya meses atrás habían enfrentado en la Planta 2 la amenaza de colocar en esa situación a 40 trabajadores si es que no aceptaban los incentivos que les ofrecía la empresa para retirarse. Antes de eso, incluso, unos 30 trabajadores habían sido forzados a vender sus renuncias desde el fin de la huelga del 2022, en un contexto de paralizaciones y cierres de varias líneas de producción.

Esta situación sucede, en diferentes grados, en la mayoría de empresas, pequeñas y grandes. Sucedió

en Textil Hialpesa, Corporación Miyasato, Unique S.A., Yobel SCM Logístico S.A., Faber Castell, Aje Kola Real, cocinas Récord; involucrando a cientos de trabajadores que en su mayoría han quedado en la calle. Ahora ocurre en Celima y San Lorenzo, son dos grandes empresas con posiciones ganadas en el mercado mostrando que “nadie está a salvo”.

Antes ocurrió algo peor: en BSH Electrodomésticos (ex Coldex), Panasonic y Cogorno, que de sucesivos ceses colectivos pasaron después al cierre definitivo.

Se trata de un problema mucho más generalizado en la clase obrera, donde sólo el 3% tienen sindicatos y pueden denunciar y enfrentar dicha situación.

Con el agravante siguiente: en muchos casos, cuando los procesos son “ganados” legalmente por los obreros, solo una minoría logra ser repuesta porque la mayoría no logra resistir el largo proceso. En el camino, han quedado y siguen quedando organizaciones sindicales debilitadas cuando no destruidas.

El problema de fondo

El Perú vivió un boom económico en el periodo 2004-2015 impulsado por una excepcional alza internacional en los precios de los minerales. Esto trajo grandes inversiones, actividad económica y empleo, aunque precario y con un régimen laboral flexibilizado. La fiesta acabó el 2015 y, desde entonces, el crecimiento económico volvió a tasas mínimas, e incluso el año pasado cayó en recesión.

Con el “fin de la fiesta” vino el ajuste patronal para defender sus ganancias. Retornó del desempleo crónico, el crecimiento de la pobreza, el retroceso en los servicios básicos de educación y salud; todo lo cual la vivimos descarnadamente en la pandemia, cuando el Estado y el capital mostraron que su prioridad era salvar las ganancias antes que las vidas de la gente.

La respuesta obrera y popular se dio en las elecciones del 2022, donde eligieron a Pedro Castillo, al más radical de los candidatos, que

ofrecía “no más pobres en un país rico”. La fiera oposición de la burguesía y, finalmente, la imposición del actual gobierno de Boluarte –un remedio del fujimorismo–, ha mostrado que, para ella, es intolerable ningún retaceo de su modelo de economía liberal, y mostró que en su defensa está dispuesto hasta matar, como la cruenta represión que dejó 49 víctimas ejecutadas en las protestas del sur.

Pero no solo eso. La burguesía quiere otro “shock” que profundice el modelo neoliberal: que se remate Petroperú y Sedapal, que se imponga los proyectos mineros sin licencia social (Tía María, Conga), que se deforeste la Amazonía en beneficio del agronegocio, que se acabe con los pocos derechos laborales vigentes y se faciliten más los despidos y para que no sean costosos.

La situación de la clase obrera

Mientras estas pretensiones son resistidas y enfrentadas por la

población y los sectores democráticos, los empresarios recurren a las medidas que les permite las normas vigentes, con la venia de las autoridades, en su afán de preservar sus ganancias. Así aplican ceses colectivos, suspensiones perfectas, compras de renuncias; y en general, congelan los salarios y recortan beneficios, precarizando más a los trabajadores. En últimas, cierran fábricas y llevan "su plata" a otro lado.

Los casos de Celima y San Lorenzo no son pues los únicos ni los últimos: son parte de una ola patronal que se ceba contra los trabajadores desde hace años.

Estos mismos días, en Química Suiza, propiedad del poderoso Grupo Intercorp, se fuerza a 900 trabajadores a pasar a la modalidad de tercerización. En H&M, una multinacional que fabrica y comercializa ropa de marca, se producen numerosos despidos arbitrarios. En Telefónica, el STTP despierta de su larga inmovilidad para enfrentar una inminente amenaza de despidos masivos. El recién fundado Sindicato de Latina Televisión, fue recibido con el despido de su directiva en pleno. En Ripley la empresa ni siquiera se digna a sentarse a negociar el pliego desde hace dos períodos, mientras mantiene hostiliza la actividad sindical.

Es decir, ante la prolongada languidez de la economía, que es culpa del modelo que los mismos empresarios defienden, estos descargan sobre los trabajadores los ajustes que necesitan para proteger sus ganancias. Y no van a parar, buscando incluso nuevos retrocesos a los derechos laborales.

La falta de respuesta

Los trabajadores y sus organizaciones luchan como pueden. Pero es claro que un botecito no puede surcar una ola o una tormenta, que está propinando golpes y retrocesos de sus organizaciones.

Hace rato que se necesita –y nunca será tarde–, la respuesta unida de la clase obrera para derrotar ese ataque e imponer soluciones de otro tipo, como el cambio del modelo económico que preserve los intereses del país y los derechos laborales y sociales.

Pero esto no se produce porque los llamados a hacerlo, las centrales (CGTP, FETRIMAP), **no lo hacen**.

No lo hacen y tratan la problemática como conflictos aislados producto de empresarios inescrupulosos, y no como un ataque del modo de producción capitalista que se regular por la ganancia. Por tanto, encasillan el problema a un tratamiento legal en el MT o el PJ, y no como un problema político, que cuestione el modelo y al mismo marco legal que lo protege.

"Hay que poner en el centro la lucha por la derogatoria del proceso de ceses colectivos y, su apéndice, la suspensión perfecta"

Jack Reyes, 19 años de trabajo en Celima S.A., dirigente en varios períodos y reconocido activista obrero, es ahora presidente del Comité de Lucha que encabeza la pelea contra el cese colectivo declarado por la empresa.

¿Cuántos trabajadores están afectados y por qué se da el cese colectivo?

En un inicio fuimos 216 trabajadores, desistieron 115 del proceso, algunos acogiéndose a los incentivos de la patronal y otros fueron reubicados.

El objetivo de la empresa es claro: necesita mano de obra más barata y explotada para seguir garantizando sus altas tasas de ganancias. Para esto, le urge eliminar todo rastro de la organización sindical.

¿Cuál es el problema, si Celima es una gran corporación con varias plantas y múltiples empresas?

El problema es la instalación de dos nuevas grandes empresas chinas de cerámicos en el país, que le aseguran una competencia sin cuartel, con mano de obra a precio de china, sin derechos ni organizaciones sindicales que hagan frente a sus abusos.

El cese se presentó el 7 de agosto y se va a cumplir dos meses. ¿En qué situación está el proceso?

Hasta el momento, gracias a nuestra lucha organizada y consecuente, hemos podido arrancar dos resoluciones favorables sobre la calificación del proceso de ceses colectivos.

CELIMA espera que en la última instancia le salga a favor, apelando a la corrupción y a que los funcionarios de Dirección General del Ministerio de Trabajo son serviles a los patrones, y a las mismas normas que le son favorables.

La empresa acusa problemas: cierra una planta y otra está en ese camino. ¿La ley no le facilita hacerlo cuando hay crisis al "existir causas objetivas"?

Bajo la política capitalista, es cierto. Pero también preguntaría: ¿cómo es que CELIMA llegó a ser una gran empresa?, ¿cómo fue que su capital creció al 1000%? La respuesta es simple: gracias a la explotación de sus trabajadores. Mientras CELIMA es millonaria sus trabajadores seguimos siendo podres.

O preguntarnos: ¿Quiénes



Foto: Archivo Bandera Socialista

Jack Reyes, combativo ex dirigente hoy preside el Comité de Lucha de Celima

sostuvieron la fábrica en plena pandemia? Fuimos los trabajadores, algunos incluso murieron por exponerse al contagio y muchos perdieron familiares. Por eso, ante la política capitalista que solo ve sus ganancias, luchamos para que se preserve primero nuestro derecho al trabajo.

¿Qué demandan entonces?

Que consideren nuestros años de trabajo en la empresa. Que ahora compartan un poco la torta que acumularon por años.

¿Y qué harían si cierran la fábrica, como ha sucedido en otros casos?

Si cierran la planta 1 y 2, queda la planta 3. Deberían reubicarnos en esta planta, o en alguna de las otras empresas que tiene la corporación. La otra es que, si dicen que "ya no pueden mantener sus plantas", ni mucho menos garantizar nuestro trabajo, entonces que nos den la administración las plantas que cierran, que están plenamente operativas

Hay antecedentes. En Argentina, cuando el patrón no podía sostener sus fábricas, los trabajadores tomaron posesión de ellas para defender sus empleos.

¿Cómo piensan encarar este problema en un contexto donde la misma situación se presenta en diversas empresas?

Necesitamos organizarnos toda

la clase trabajadora y poner en el centro la lucha derogatoria del proceso de ceses colectivos y su apéndice la suspensión perfecta de labores. Hay que exigir al gobierno la solución de los problemas que aquejan a los trabajadores y al pueblo pobre.

¿Qué acciones están tomando para lograr sus objetivos? ¿Qué planes tienen visto que es un proceso que da para largo?

La tarea principal es explicar y concientizar, empezando por nuestros compañeros del sindicato. Y entender que este problema no es solo nuestro, es de toda la clase trabajadora. Sin trabajo, se acaban los derechos.

¿Cómo se están organizando?

Nuestras asambleas son la máxima expresión de organización donde aprobamos los planes de nuestro comité de lucha. En segundo lugar, nuestras reuniones a puerta de fábrica, donde explicamos y concientizamos a nuestros compañeros que están laborando.

¿Algún llamado final?

Un llamado a toda la clase trabajadora, sindicatos, federaciones: necesitamos unir fuerzas para que, junto a las centrales, podamos exigir al gobierno solución a la agenda de los trabajadores y el pueblo. Y hacerlo mediante jornadas de lucha y paros nacionales.

Parar (todos) contra la inseguridad y el gobierno

 Por Víctor Montes

Trabajadores y empresas de transporte realizaron un paro de 24 horas el pasado 26 de septiembre contra la incapacidad del gobierno para poner fin a la escalada de extorsiones y atentados contra sus unidades de transporte y contra sus vidas.

Lima amaneció sin unidades de transporte. El paro contundente, obligó a que Boluarte y su consejo de ministros tomaran rápidamente medidas, anunciando en horas de la tarde la declaratoria de 17 distritos de Lima ‘estado de emergencia’.

Con esto, se suspendió el segundo día de paro, a la espera, sin embargo, de que el gobierno haga algo efectivo frente a la inseguridad.

La respuesta del crimen organizado

Paso un día, sin embargo, para que las bandas de extorsionadores realicen un nuevo atentado contra unidades de transporte público en el distrito de independencia (uno de los distritos declarados “en emergencia”): una veintena de autobuses fueron quemados en una cochera tras el estallido de una granada.

Con esto dejaron en claro que las medidas adoptadas por el gobierno hoy, son tan estériles como los “estados de emergencia” impuestos el año pasado en muchos de los distritos afectados hoy por la medida.

La situación y la respuesta

El crimen organizado, verdaderas empresas delincuenciales, ha crecido exponencialmente en el último periodo. Y dentro de las actividades que realiza, la extorsión se ha extendido rápidamente por la ciudad. No solamente transportistas: comedores populares, tiendas y



Foto: Diario La República

negocios de los barrios, cada día son obligados a pagar cupos para garantizar su seguridad.

En el caso del transporte han resultado impactantes los atentados contra las unidades incluso en ruta. Choferes y cobradores han pagado con su vida el resistirse a pagar a las bandas criminales.

Un paro justo

El sistema de transporte en el Perú, y particularmente en Lima, caracterizado por la informalidad, es producto del plan neoliberal impuesto por la dictadura fujimorista, que destruyó a la empresa nacional de transporte urbano, para abrir el camino a las combis, custers y demás servicios de transporte público, como una magra salida a la falta de trabajo.

Muchos de sus trabajadores no tienen salario ni horario fijo, seguro o sistema de pensiones. Y encima, lidian con la criminalidad. Han sido estos trabajadores los que han puesto el pecho durante el paro, movilizándose y enfrentándose a las pocas unidades que intentaron romper la medida de fuerza.

De esta forma han encabezado un paro justo, que a pesar de haber afectado a millones de trabajadores

y trabajadoras que debían dirigirse a sus centros de labores, ha ganado su solidaridad pues manifestó al mismo tiempo el hartazgo de esa población trabajadora con la ola criminal.

¿De dónde viene la actual ola de inseguridad?

El boom de las exportaciones que se produjo entre 2004 y 2013, incrementó las ganancias patronales. Mientras los gobiernos hablaban de ‘milagro peruano’, y prometían la llegada del Perú al ‘primer mundo’, la economía informal e ilegal crecía en paralelo al crecimiento económico general, aprovechando la miseria de nuestra sociedad.

Desde entonces las bandas criminales no han cesado de crecer, actuar y de “diversificar” sus ‘negocios’, ni de incrementar su violencia.

En ese contexto, las bandas han terminado sirviendo de refugio y medio de supervivencia para los sectores más miserables y empobrecidos de la población, que no tienen camino en la economía ni formal ni informal.

Un gobierno incapaz

Boluarte, que reprimió a sangre y fuego el levantamiento del sur para

mantenerse en el poder, se muestra incapaz de hacer frente a la criminalidad, debido, por una parte, a que no puede romper el modelo económico, para garantizar trabajo para todos y todas.

Para esto, el gobierno tendría que tomar control de las empresas que despiden, disminuir la jornada laboral a 4 horas diarias para garantizar que todos tengamos acceso a un puesto de trabajo, e incrementar el salario y las pensiones para garantizar una vida digna. Nada de eso es posible bajo la lógica del capitalismo neoliberal.

Pero, por otro lado, el Estado está comprometido hasta la médula con el crimen organizado por medio de la corrupción que lo infecta por completa, y particularmente a las fuerzas policiales y militares, a las que justamente les entregan más poder cuando decretan el Estado de emergencia.

Muchos de esos efectivos forman parte de las propias bandas criminales.

El propio gobierno, congreso y poder judicial, está infestados y formados por bandas criminales, como prueban los casos ‘Waykis en las sombras’, ‘Chibolín’, ‘Cuellos blancos’, y un largo etc. Por eso no es extraño que hayan sacado el delito

de “extorsión” de la ley que establece los delitos del crimen organizado.

Frente a esto la alternativa sería la conformación de rondas urbanas, que actúen armadas por el propio Estado para hacer frente a la criminalidad. Rondas donde en lugar de rangos, se elijan los mandos y se les revoque en cualquier momento. Pero otra vez, la sola posibilidad de que el pueblo organizado y armado pueda defender sus propios intereses y sus vidas, aterra a los patrones.

Del mismo modo, se hace urgente que sean tribunales de las organizaciones populares y de trabajadores los que tomen en sus manos los juicios contra los criminales, para evitar que sean comprados por el dinero de los criminales y de la patronal.

Organizar la lucha contra el crimen sin confiar en el gobierno ni en el Estado

Por eso hoy requerimos escalar, del paro de transporte, con el que nos solidarizamos plenamente, a una acción unificada nacional, convocada por las centrales sindicales, como la CGTP, CUT, etc. y demás organizaciones populares, contra este gobierno y la criminalidad, por trabajo, salario y seguridad. Así como por justicia y sanción a los responsables de la represión que asesinó directamente a 49 luchadores a principios de 2023, durante la rebelión del sur.

Solo unificando las diversas banderas del pueblo pobre y trabajador, enfrentando al gobierno asesino y corrupto y al Congreso reaccionario, abriremos camino a la solución de nuestras demandas, que solo podremos realizar plenamente rompiendo con el capitalismo neoliberal, de la mano de un gobierno de las organizaciones de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre y oprimido.

UN DEBATE ESTRATÉGICO

¿Adecuarse o superar la legalidad patronal?



Por Víctor Montes

La ola de despidos, ceses colectivos, e incluso cierre de plantas que se vive en el país, obliga a que la vanguardia conciente de la clase obrera discuta con qué estrategia se debe hacer frente a este terrible ataque de parte de la patronal.

Mantenerse en los marcos del dominio del capital

Por una parte, los sectores ligados al reformismo de izquierda, proponen como estrategia concentrar la acción en el terreno legal, “presionando” al ministerio con plantones limitados, y exigiendo, como mucho, la modificación de la ley de ceses colectivos.

Para esos sectores, los marcos de la llamada “democracia” –en realidad democracia burguesa, patronal–, su legalidad y principios, se constituyen en las reglas de juego irrompibles, sobre las cuales deben surfiar.

Más. Desde esa lógica, las propias instituciones del Estado, como el ministerio de trabajo, son instancias “en disputa”, que es posible “presionar”, para que se pongan “a favor” de la lucha obrera.

Sin embargo, toda esa comprensión de la realidad, es equivocada. Primero, porque aceptar la legalidad como marco (y techo) para la lucha obrera, parte de la premisa de aceptar la explotación y el dominio de los patrones, consagrado en las leyes. No es posible “hacer más humano” el capitalismo. O hacer “decente” la explotación. Y la legalidad patronal, burguesa, está hecha, en primer lugar, para consagrarse su derecho a explotar a la clase obrera. Y el despido es uno de los mecanismos que, justamente, les permite incrementar esa explotación.

Es por eso mismo que no es posible “presionar” a las instituciones de la democracia patronal para que “apoyen” a la clase obrera. Con esta concepción, tergi-

versan lo que realmente sucede cuando la clase obrera se moviliza hacia las instituciones del Estado y consigue algún fallo favorable: lo que hace la clase obrera es arrancar conquistas, sin cambiar el carácter patronal de dichas instituciones.

El ejemplo más sencillo fue la derogatoria de la “Ley pulpín”. La lucha obrera y juvenil, de diciembre de 2014 a enero de 2015, obligó al Congreso a derogar la mal llamada Ley de trabajo juvenil. Sin embargo, a pesar de la votación que derogó dicha norma, el Congreso nunca dejó de ser el establo de los intereses de la patronal.

Tampoco es posible que



CONCILIACIÓN DE CLASES: Mientras tanto los dirigentes burócratas de la CGTP sentados en la misma mesa con los directivos de la Confiep, alientan que por esa vía se solucionan las reivindicaciones.

una “Ley de ceses”, aunque sea modificada, esté “a favor” de los trabajadores, o sea, siquiera “justa”. Ya que, de partida, al existir una ley de ceses, se acepta que los patrones tienen el derecho a despedir masivamente.

Politicizar e impulsar la movilización permanente

Por nuestra parte, restando que no es posible hacer “justa” la lógica del capital y la explotación, y entendiendo que las leyes y todas las instituciones del Estado defienden los intereses de los patrones –aunque a veces lo hagan en forma maquillada–, comprendemos también que la única forma de enfrentar realmente los despidos, ceses y cierres de fábricas, es levantar banderas que pongan en cuestión la explotación y el dominio de los patrones sobre toda la sociedad.

Por eso la estrategia pasa por la lucha unitaria de toda la clase obrera, contra el gobierno, el congreso y la legalidad burguesa que avala los despidos.

Ahí donde la patronal inicie despidos masivos o cierres de plantas, es preciso tomar las fábricas, recuperarlas para los trabajadores



MOVILIZACIÓN DE MASAS Y LA HUELGA: Ampliamente debatida y aprobada desde las bases es la clave para triunfar.



y trabajadoras, y ponerlas a funcionar. Esto fue lo que hicieron miles de obreros en Argentina durante y tras la crisis de 2001, y mucho antes, hicieron los obreros estadounidenses durante la “Gran depresión” y los obreros franceses en la década del 30 del siglo pasado y diversos sindicatos en nuestro propio país durante la década de 1980.

Nacionalizar y reducir la jornada

Pero esto es solo el comienzo. Es la reacción inicial. De inmediato, en el torrente de la lucha, los trabajadores y trabajadoras conscientes debemos demandar la entrega de las finanzas y cuentas de todas las empresas, su nacionalización sin pago, y su entrega formal a los trabajadores para que sigan produciendo.

Para nosotros no cabe duda que la detención de las líneas, y los cierres de fábrica, son producto de la competencia capitalista, no de la acción de los trabajadores. Los patrones cierran, porque no van a obtener las ganancias que quieren, y buscan mejores negocio donde colocar su capital.

Por eso, la salida es la

nacionalización, por parte del Estado, de las fábricas cerradas y de las empresas que inicien procesos de despido o ceses colectivos, para ponerlas a funcionar bajo control de sus trabajadores y trabajadoras. Para esto, el propio Estado deberá garantizar el capital que se requiere para funcionar.

Esta medida, sin embargo, debe ser complementada para poner fin al desempleo, y a la informalidad laboral, que nos arroja a una precaria supervivencia. Para esto, el Estado debe reducir la jornada laboral –sin reducir el salario-. Una jornada laboral de 4 horas diarias (hasta 20 horas semanales), duplica la población empleada, y puede mantener o hasta incrementar la producción, por lo que no se requiere pagar menos a sus trabajadores.

Solo en ese camino, rompiendo la lógica y el control del capital, de los patrones, podremos garantizar trabajo para todos en el país. Y aunque suene, en principio, irreal, conquistarla es posible, del mismo modo que echamos abajo la “Ley pulpín”: con la lucha unificada, consecuente y creciente de toda la clase obrera, la juventud y el pueblo.

¿Qué más debemos arrancar con nuestra lucha?

- Prohibición de despidos y reposición plena de todos los trabajadores y trabajadoras despedidos.
- Derogatoria inmediata figura de la “suspensión perfecta de labores” y la “Ley de ceses colectivos”.
- Derogatoria de todos los tipos de contratos modales, la Ley de tercerización y services
- Paso inmediato de todos los trabajadores y trabajadoras, del sector privado y del Estado a contratos a plazo indeterminado.

Los incendios forestales y los grandes intereses económicos detrás de ellos

Son 20 regiones a nivel nacional afectados por los incendios forestales. El impacto es sido devastador: quince personas han muerto, 155 heridos y más de 1.800 ha. afectadas. Alrededor de 1.495,33 hectáreas de cultivo se han perdido. Otras 1.264,85 han quedado dañadas.

Mientras tanto, las autoridades intentan minimizar y ocultar –con la colaboración de los grandes medios de comunicación–, las verdaderas razones que estarían detrás de estos incendios: los grandes intereses agroindustriales en el país, el avance de las actividades económicas ilegales (tala, minería y narcotráfico) y el resultado del calentamiento global ocasionada por el modo de producción capitalista.

Los incendios forestales y la falta de acción de las autoridades

Han sido destruidas hasta el momento más de 2.257,96 hectáreas de cobertura natural. Con más de 4 mil animales heridos y damnificados, y sin saber cuántos de ellos han muerto. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), durante el 2024 se registraron 233 incendios forestales. Las cifras del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, evidencian un incremento del 115,51% en los últimos cuatro años. El último informe del COEN de Amazonas señala que 9 incendios forestales permanecen activos en este departamento y que el reporte de daños indica que se han perdido 16 801 hectáreas, en su mayoría de cobertura natural.

Fanny Cornejo, directora de la Asociación Civil Yunkawasi, señala que se están “incendiando áreas que normalmente no se queman de forma natural”. Asimismo, señala cómo el incendio ocurrido en la Comunidad Campesina de Corosha, región Amazonas, ha terminado con uno de los hábitats más importantes para el oso andino



u oso de anteojos, una zona que en algún momento la Comunidad solicitó que se declarara como área de conservación privada, pero no se concretó”, haciendo referencia al espacio de unas 1000 hectáreas con pajonales naturales que estaban en buen estado.

A pesar de estos datos alarmantes, el accionar del gobierno ha sido tardío y con ánimo de minimizar los daños. Similar a lo que hizo el mismo Pedro Castillo en el derrame de petróleo de la empresa Repsol en las playas de Chancay, y que afectó alrededor de 11 mil hectáreas, al no actuar y tomar medidas para mitigar y evitar que la tragedia se extienda.

Los grandes beneficiarios de esta tragedia

El gobierno y los grandes medios intentan convencer a la opinión pública de que la responsabilidad de los incendios es de los pequeños y medianos agricultores, debido a sus prácticas ancestrales. Si bien estas prácticas existen, en la realidad no explica el gran desastre y la rápida extensión de los incendios, al igual que en los en Brasil, Bolivia, Ecuador. Al contrario, aquella idea es un absurdo; de ser cierta ya nos habríamos quedado sin Amazonía hace mucho tiempo.

Todos estos hechos y discursos más bien son acciones dirigidas a proteger los grandes negocios agroindustriales detrás de ellos. Negocios

que se benefician de la Ley Forestal recién dictada, que indica la suspensión de la obligatoriedad de la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes, y la legalización de las zonas sin masa boscosa donde se desarrolle actividad agropecuaria, sin importar si es legal o no, y que beneficia a empresas legales como ilegales (minería, tala, etc.) que continúan con la invasión de territorio forestal y la deforestación en la Amazonía.

Este beneficio, para las grandes empresas, está promoviendo cada vez más la ambición por expandir zonas para fines comerciales: la plantación de palma aceitera, cacao, café. Ya que las zonas destruidas por los incendios podrán ser consideradas ahora zonas para actividades agrarias, sin importar si son incluso parte de áreas de zonas protegidas, tal como sucedió con la devastación forestal de más de 25.000 hectáreas en el territorio ancestral de la comunidad indígena Santa Clara de Uchunya, en Ucayali.

El negocio sobre la Amazonía se sigue expandiendo con o sin ley. Y los luchadores y líderes indígenas que ponen su vida para defenderla, lo saben muy bien.

Una reciente investigación llevada a cabo por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) denuncia el crecimiento del negocio de la deforestación en el Perú, específicamente en las regiones

de Loreto y Ucayali, como consecuencia de la expansión de la agroindustria, en zonas declaradas hace poco en estado de emergencia por los incendios forestales.

El estudio se enfocó en 10 empresas involucradas en la producción de estas materias primas, entre ellas Plantaciones de Lima y Cacao de la Amazonía, y Plantaciones de Pucallpa (hoy Ocho Sur P). Y descubrieron que siete de ellas adquirieron tierras en áreas donde más de 13 mil hectáreas habían sido deforestadas. De ellas, tres no contaban con los permisos necesarios para tal efecto.

La influencia del calentamiento global en los incendios forestales

El cambio climático, marcado por nuevas catástrofes producidas por fenómenos extremos, cada vez más intensos y cada vez más frecuentes como las sequías en la zona andina, es el resultado del calentamiento global causado por la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), que liberan toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera por culpa de la industria capitalista y su voraz consumo de petróleo.

La destrucción ambiental en el Perú y las emisiones de GEI están directamente relacionadas con el modelo económico actual, basado en la exportación de productos primarios, agrícolas o minerales. Además, la expansión

territorial de este modelo de agricultura, no puede detenerse en el marco de este sistema. Esto se debe a que la reducción de los precios de producción del sector depende de la apertura permanente de nuevas tierras, incluso las menos fértiles, para obtener una tasa de la renta de la tierra cada vez mayor.

Defendamos la Amazonía

La tendencia de los grandes propietarios es controlar cada vez más las mejores tierras y adquirir mayores cantidades de ingresos. Además, buscan aprovechar el incremento de los precios de los aceites vegetales, como de la palma aceitera, que se ha visto en alza debido a la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero también buscan presionar al Estado para tener más leyes a su favor, así como lo hicieron con la ley 31973 para ganar nuevas áreas en la producción.

Ante esto, los trabajadores y el pueblo necesitamos organizarnos y manifestarnos en las calles en primer lugar para exigir medidas urgentes y efectivas para frenar los incendios forestales cuanto antes, y por más presupuesto para combatir y prevenirlos, pues hay una carencia de material y equipo logístico.

Necesitamos también impulsar la lucha contra la deforestación, no solo contra los que lo hacen impunemente, sino también contra el aparato estatal manchado de sangre y corrupción que está dispuesto a sacrificar la Amazonía a favor de los grandes intereses empresariales.

Este combate tiene que tener como objetivo cambiar todo e imponer nuestras demandas más urgentes en el tema medioambiental, sumando el alza del costo de vida, la recuperación de nuestros recursos naturales y la necesidad de tener una verdadera participación, a través de los organismos obreros y populares, en la toma de decisiones del país.



Argentina: Gran triunfo de los trabajadores aceiteros

Toda la clase obrera tiene que seguir ese camino

Los gremios de la industria aceitera han impuesto a patronales y gobierno un aumento salarial muy importante: un 26% para este mes, con lo que totalizan un 122% en el año 2024. El básico será de \$ 1.565.655.

No fue un "regalo". Las patronales (empresas multinacionales o nacionales que exportan por miles de millones de dólares y ganan fortunas) se habían negado, con el objetivo de frenar el aumento, y derrotar a los obreros y sus organizaciones. El gobierno, por su parte, intenta poner un techo a los aumentos por debajo de la inflación. Ha dicho que no homologará aumentos superiores al 2%.

Lo lograron a través de la lucha. Para eso llevaron adelante un paro por tiempo indeterminado que duró 7 días, con bloqueos y piquetes frente a las plantas de todo el país y el puerto de Rosario, que frenó las exportaciones. Lo votaron en asambleas por fábrica y un Plenario nacional que reunió 250 delegados de todo el país, y resolvió las medidas de lucha.

Desafilaron así no solo a los empresarios y al gobierno, sino toda la legalidad vigente, que está al servicio del capital privado.

Un modelo para toda la clase trabajadora

La inmensa mayoría de

los dirigentes sindicales corruptos aceptan un modelo de negociación a través de paritarias totalmente controladas por el gobierno y las patronales, donde se negocia siempre a la baja. Se toma la inflación pasada como objetivo máximo, y se negocia partiendo de salarios que ya vienen muy por debajo de la canasta familiar.

Es así como los trabajadores han perdido en los últimos años un tercio de su salario, con uno u otro gobierno.

Los aceiteros hace años disputan su salario sobre la base de un criterio totalmente diferente al resto de los sindicatos. Por eso, intentaban derrotarlos para impedir que se extienda su ejemplo.

Sostienen que la clase obrera tiene que hacer cumplir el derecho a salario mínimo, vital y móvil según la definición del Artículo 14 bis de la Constitución, y el Art. 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, un salario que asegure en su jornada legal de trabajo (8 horas) los derechos básicos para toda la familia: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Y que se actualice junto a la canasta, de acuerdo a la inflación.

Impusieron esa forma de negociar salarios a

través de la paralización de puertos y fábricas hace años, y siguen utilizando el mismo método.

De ese modo, acaban de quebrar el techo salarial que pretendía el gobierno de Milei y las empresas.

¿Solo los aceiteros?

Los demás gremios y las patronales se justifican con el argumento de que esa industria tiene mucho beneficio, porque trabaja para la exportación.

Es un argumento falso. Todas las patronales del país ganan fortunas (en más o en menos), y pueden pagar salarios como esos. Basta con hacer el cálculo de cuánto representa el costo salarial en la facturación de cualquier empresa, para constatar que es mínimo. Los trabajadores tenemos el derecho de conocer la contabilidad de las empresas, para conocer estos datos.

En verdad, todos los gremios y la CGT deberían luchar por un salario mínimo como el de aceiteros. No lo hacen porque tienen negocios y acuerdos con las patronales. Y son parte de organizaciones políticas como el peronismo, que defiende a sectores empresarios.

Es necesario tomar esta forma de reclamar salario en manos del activismo obrero, de delegados de base coordinando con

los Aceiteros y demás sindicatos independientes de los viejos dirigentes traidores.

El derecho a vivir dignamente con nuestro trabajo, tenemos que tomarlo en nuestras manos. Eso solo será posible luchando por una nueva dirección sindical y política, y por sindicatos y organizaciones obreras que funcionen de una manera diferente, con democracia de las bases, con asambleas y plenarios de delegados con mandato.

Por un plan de lucha nacional

Daniel Yofra, dirigente de los Aceiteros, dijo durante la lucha que "hace falta un paro general y un plan de la lucha". Y que no hace falta esperar a la CGT y sus dirigentes para llevárla adelante. Incluso recordó que en la década del 90 se hicieron varios paros generales por fuera de la CGT, coordinados por distintos gremios, organizaciones de desocupados, etc.

Tiene razón. Hay que derrotar al gobierno y sus planes. Pero la CGT, luego de convocar algunas medidas se "mandó guardar", no hizo más nada.

Entonces, Yofra tiene que avanzar, no quedarse en las palabras. Su gremio viene de un gran triunfo, y fue el único que paró cada vez que en el Congreso se votaron las leyes

propuestas por Milei.

Eso le da autoridad para convocar un Encuentro Nacional de dirigentes y activistas de diferentes gremios y sectores, para dar los primeros pasos en la organización de ese plan de lucha. No será una tarea sencilla, pero es necesaria y posible. La clase obrera argentina tiene una larga historia de organización y lucha, superando las traiciones de los dirigentes.

¿Y la izquierda?

Las organizaciones de izquierda tienen una inserción minoritaria pero importante en diversos sindicatos, organizaciones sociales y estudiantiles. No tienen la fuerza para encarar por sí solas una lucha como necesitamos, pero pueden ser un factor importante en su preparación.

Para eso, hay que abandonar la política de intentar medidas por su cuenta, que no logran contundencia, y "columnas independientes" intrascendentes. La izquierda tiene que ponerse al servicio de esta política, dirigirse a sindicatos como el aceitero y otros, y convocarlos a ponerse a la cabeza de una lucha nacional hasta vencer.

Nuestro partido se pone a disposición de este objetivo, y llama al activismo obrero y juvenil a hacerlo juntos.



¡Por el fin de los ataques israelíes contra el Líbano y el pueblo palestino!

Por Fabio Bosco

El 23 de septiembre, el Estado de Israel llevó a cabo el mayor y más mortífero ataque contra el Líbano desde 2006. Hubo 1.300 bombardeos que mataron a 500 personas, la gran mayoría de ellas civiles, e hirieron a más de mil personas. Los hospitales están llenos y más de cien mil libaneses buscan refugio en Beirut y el norte del país.

El ataque del día 23 culminó una semana de ataques criminales contra el Líbano.

El 17 de setiembre, el servicio secreto israelí (conocido como unidad de guerra cibernética 8200) hizo explotar dispositivos de mensajería "pagers" ["buscapersonas"] provocando 12 muertos y 2.300 heridos, muchos de los cuales sufrieron heridas graves en manos, ojos y cintura. Según *The New York Times*, los pagers fueron fabricados y comercializados por una empresa de fachada creada por el servicio secreto israelí y utilizados por Hezbollah.

Al día siguiente, el 18 de setiembre, explotaron cientos de "walkie-talkies" de radio utilizados por miembros de Hezbollah, provocando 25 muertos y 700 heridos, otro ataque atribuido a los sionistas.

El 20 de setiembre, el ejército israelí lanzó seis misiles contra dos edificios residenciales en el barrio de Dahiyeh, en el sur de Beirut, provocando 45 muertes, entre ellas las de 16 miembros de las brigadas Abbas y Fuerza Radwan del Hezbollah, entre ellos los comandantes Ibrahim Aqil y Ahmed Mahmud Wahbi.

El día 22, la fuerza aérea israelí llevó a cabo nuevos bombardeos contra 400 objetivos libaneses.

El Estado de Israel y los medios occidentales presentaron estos ataques como parte de la guerra contra Hezbollah. Pero el hecho es que, al igual que en Gaza, la gran mayoría de los muertos y heridos son civiles, y los ataques tienen lugar en suelo libanés, lo que constituye un ataque contra el Líbano y el pueblo libanés.

Esta falsa narrativa pretende no sólo confundir a la opinión pública mundial sino principalmente a la

población libanesa, de las comunidades cristiana, suní y drusa, de que no se verán afectadas, invirtiendo en la baja popularidad del Hezbollah entre estas comunidades y evitando una resistencia nacional unificada que ya ha derrotado las agresiones israelíes en 1982 y 2006.

A través de estas cobardes agresiones, el Estado de Israel busca desarticular a Hezbollah y preparar una invasión terrestre, lo que es motivo de disputa entre el gobierno israelí y los líderes militares, pero cuenta con apoyo mayoritario entre la población judía israelí y por lo cual ha sido desplazada una división militar con 10.000 soldados hacia la frontera con el Líbano.

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, pronunció un discurso televisado en el que afirmó que Israel había cruzado todas las líneas rojas, pero que su acción no había logrado debilitar a Hezbollah y advirtió además que una invasión terrestre le daría a Hezbollah una oportunidad histórica.

Sin embargo, además de hacer inviable el uso de "pagers" y "walkie-talkies" y asesinar a importantes comandantes, la agresión israelí pone en duda hasta qué punto el servicio secreto israelí logró obtener información entre las filas del Hezbollah.

En cualquier caso, el 23 de setiembre, mientras las fuerzas israelíes bombardeaban alrededor de 400 puntos en el sur del Líbano, Hezbollah lanzó alrededor de 100 cohetes y misiles contra la base aérea de Ramat David y otros objetivos dentro del territorio controlado por el enemigo, alcanzando una ciudad

localizada a 20 kilómetros al norte de Haifa.

Esta es una demostración de que, a pesar de los ataques, Hezbollah todavía es capaz de atacar al enemigo. La cuestión es la línea roja autoimpuesta por el grupo y por su aliado, el régimen iraní, de no utilizar misiles de largo alcance contra objetivos israelíes mucho más allá de la frontera.

¿Fin del gobierno de Netanyahu o fin del Estado de Israel?

La agresión contra el Líbano ocurre simultáneamente con los ataques genocidas diarios en Gaza y en Cisjordania.

Las potencias imperialistas se esconden detrás de la exigencia de negociaciones para un alto el fuego inmediato, pero continúan proporcionando armas, petróleo y apoyo diplomático al Estado de Israel para continuar con el genocidio palestino y las agresiones contra el Líbano. Es el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, que suministran armas a Israel, y de China y Rusia, que presionan al régimen iraní para que no tome represalias contra los ataques israelíes, para no "regionalizar la guerra", lo que facilita el trabajo de los criminales sionistas.

Varios analistas afirman que el principal obstáculo para el alto el fuego es Benjamin Netanyahu y su intento de reconstruir su base electoral perdida el 7 de octubre y evitar investigaciones sobre los fallos de seguridad de ese día, así como los tres procesos judiciales en su contra en la justicia israelí por corrupción, lo que podría conducir a su prisión.

Es cierto que Netanyahu es un

obstáculo, pero no es el único. La cuestión es la naturaleza colonialista y racista del Estado de Israel y su población, que es beneficiaria del robo de las tierras, de los hogares y de la libertad del pueblo palestino.

Sin Netanyahu, este Estado racista proporcionará nuevos Netanyahus para continuar la limpieza étnica del pueblo palestino y el sistema de apartheid que comenzó hace 76 años. Por eso afirmamos que la única solución verdadera es el desmantelamiento del Estado de Israel y su sustitución por una Palestina, laica y democrática, del río al mar, donde vivirán en libertad el pueblo palestino y quienes acepten vivir en paz con los palestinos.

Solidaridad Internacional para detener los ataques al Líbano y el genocidio en Gaza y en Cisjordania

La juventud y la clase trabajadora internacional deben salir a las calles para presionar a todos los gobiernos para que rompan las relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel.

Por otro lado, el régimen iraní, que lidera el llamado "Eje de la Resistencia", no debe seguir la orientación "pacifista" del imperialismo ruso y chino, ni priorizar sus intereses de normalizar las relaciones con el imperialismo occidental mediante nuevas negociaciones de acuerdo nuclear. La prioridad debe ser construir una solidaridad efectiva con los pueblos palestino y libanés, a ejemplo de los hutíes yemeníes.

Traducción: Natalia Estrada.



Partido Socialista de los Trabajadores – PST
Sección de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional

